

MARZO

2021

Reporte de tendencias humanitarias



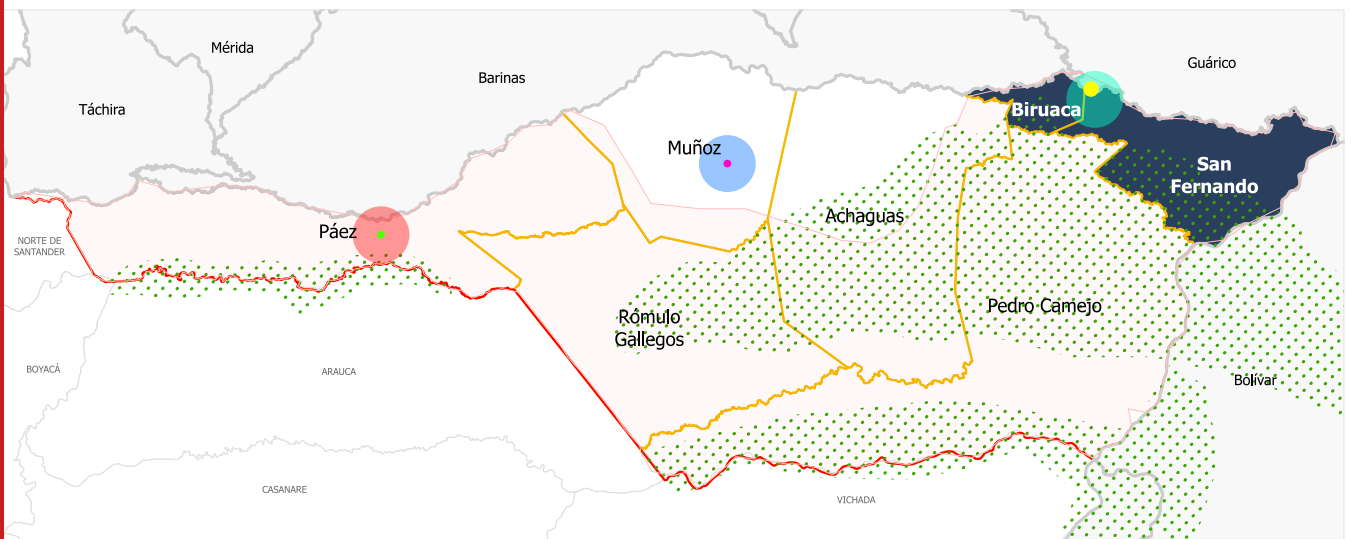
Estado Apure

- Medios de vida
- Educación
- Seguridad

Introducción

La seguridad física en Apure se deterioró rápidamente hacia finales de marzo de 2021. Más de 3.000 venezolanos arribaron a Colombia, luego de que las fuerzas especiales del ejército venezolano sostuvieron combates con grupos armados ilegales, presuntamente vinculados a las antiguas FARC. Recientemente, la presión ejercida por los grupos armados que proliferan en este territorio, se ha sumado a los desafíos humanitarios y económicos que afronta Apure, los cuales anteceden a la ocurrencia de estos incidentes. De hecho, este estado carece del nivel de productividad y empleabilidad que registran los estados andinos cercanos, ya que sus condiciones naturales oscilan entre fuertes inundaciones durante la estación húmeda y suelos resacos en la estación seca. Adicionalmente, Apure no se ha favorecido del grado de comercio transfronterizo que alienta a la economía de estados como Táchira y Zulia, en parte, por la vasta extensión y poca regulación que caracterizan a su frontera con Colombia. Apure posee algunos de los indicadores económicos más débiles, en un país que afronta una recesión económica severa. Esto derivaría, entre otras cosas, de una infraestructura vial deficiente, amplias distancias entre los principales centros industriales, cadenas de suministro débiles y una estructura económica poco desarrollada que ha conducido a un alto nivel de desempleo y a un reducido volumen de consumo. En el reporte de tendencias de marzo, el VZAT aborda tres asuntos humanitarios que sobresalen en este complejo entorno, estos son: los medios de subsistencia, la educación, y, adicionalmente, desarrolla un análisis más detallado en torno al contexto político y social que rodea a los incidentes de seguridad que ocurren actualmente en la frontera entre Apure y Colombia.

Apure – Límites políticos y ubicaciones principales



Límites políticos y geográficos

- Áreas aproximadas con presencia de grupos armados
- Áreas con presencia indígena
- Límite estatal - Venezuela
- Frontera entre Apure y Colombia
- Límite municipal - Apure
- Municipios que reportan impacto negativo por impuestos
- Límite departamental - Colombia

Ubicaciones principales

- Incautación de narcóticos - Febrero
- Enfrentamientos armados - Marzo
- San Fernando de Apure - Capital del estado
- Reportes de daños a la infraestructura educativa

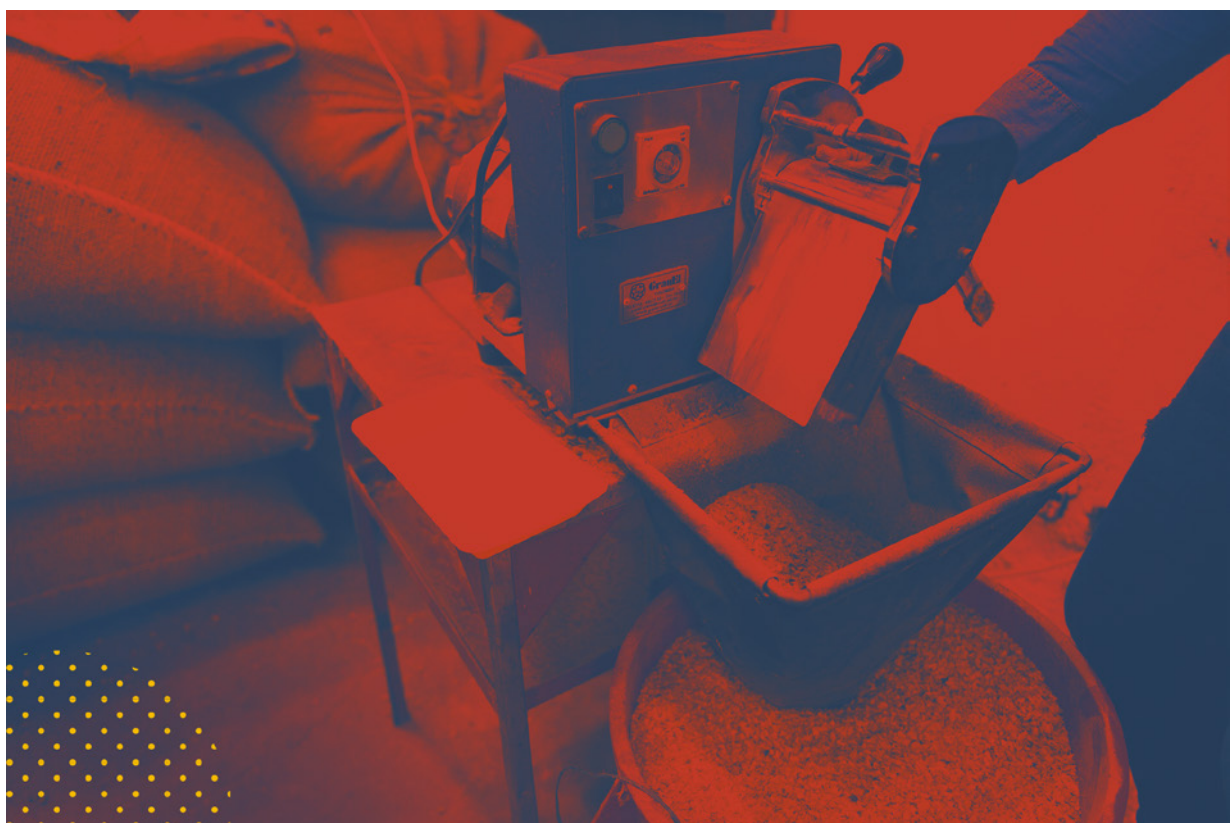
Mapa de referencia



Medios de vida

Estado Apure

El nuevo modelo fiscal menoscaba la economía municipal



En el marco de la pandemia en Venezuela, los pequeños comerciantes formales afrontan desafíos que han llevado a muchos a clausurar sus actividades definitivamente. No obstante, el origen de dichos desafíos no reside exclusivamente en la pandemia. A principios de marzo, la Cámara de Comercio y algunos propietarios de pequeñas empresas subrayaron dos problemas esenciales que afectan su rentabilidad, estos son: el incremento de los impuestos municipales y el aumento de la tarifa de la electricidad. Mientras la reforma fiscal, que buscaba mejorar las finanzas públicas y la prestación de servicios gubernamentales, entraba en vigor en enero de 2021; el operador local de electricidad, Corpoelec, elevaba sus tarifas. Esto incrementó en los costos directos de las empresas, los cuales fueron trasladados a los consumidores, reduciendo así el nivel local del consumo. Estos súbitos aumentos de los costos, aplicados en plena contracción económica, crean un ambiente de incertidumbre económica que desestimula la inversión. Una circunstancia que podría propiciar la quiebra de pequeñas empresas formales o precipitar su paso a la economía informal.

A partir de diciembre de 2017, la hiperinflación en Venezuela ha provocado un fenómeno que los economistas denominan “efecto Olivera - Tanzi”. Este consiste en una contracción de los ingresos fiscales en términos reales, a pesar de que los ingresos en bolívares técnicamente aumenten. Como resultado, los municipios afrontan crisis presupuestarias que los llevan a buscar medidas urgentes que les permitan mantener

su funcionamiento. Dado que en Venezuela cada municipio tiene la facultad legal de fijar su estructura tributaria, ante la caída de los ingresos, varios municipios decidieron elevar, aisladamente, sus impuestos. Sin embargo, algunos de estos incrementos resultaron desmedidos y perjudiciales para las empresas y las economías locales. Ante esto, a principios de julio de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió las disposiciones tributarias municipales. Posteriormente, el TSJ convocó al vicepresidente para el área económica y ministro de industrias y producción nacional, Tarek El Aissami, así como a los alcaldes y al jefe de gobierno del Distrito Capital, para construir una propuesta conjunta en torno al nuevo esquema tributario. Este asunto fue llevado más tarde al Consejo Bolivariano de Alcaldes de Venezuela que, a principios de agosto de 2020, publicó el “Acuerdo de Armonización Tributaria”. En este acuerdo, 305 alcaldes, todos alineados con el partido de gobierno nacional, adoptaron al Petro, equivalente a 60 dólares estadounidenses, como unidad referencial para el cobro de impuestos. A inicios de 2021, los 7 municipios del Estado Apure aplicaron esta nueva regulación.

Vito Vincenslao, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Apure, señaló el 10 de marzo que esta nueva disposición, a pesar de buscar fortalecer los presupuestos locales y homogeneizar los impuestos, acelera la contracción del comercio estatal, un sector que ha afrontado cuarentenas, restricciones a la movilidad y la escasez de combustible. Este pronunciamiento fue respaldado por los pequeños comerciantes formales de San Fernando y Biruaca, quienes sostienen que el costo de la renovación anual de las licencias y permisos, que actualmente asciende a 0,5 Petro o 30 dólares por transacción, los empujará a cerrar sus negocios. Adicionalmente, los pequeños comerciantes también deben enfrentar el aumento en la tarifa eléctrica. A finales de 2020, los pequeños comerciantes recibieron facturas anuales de electricidad que ascendieron a 500 dólares. Estos aumentos fueron justificados en que las tarifas son más bajas en comparación con las de los países vecinos, así como en la necesidad de financiar obras de mejoramiento de la infraestructura eléctrica del estado. A pesar de ello, persisten los apagones no programados que pueden prolongarse por cuatro o cinco horas. Según el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), en enero de 2021, el 26,1% de los encuestados en San Fernando padeció interrupciones diarias del servicio eléctrico. Estas fallas no sólo causan molestias generales y estropean los alimentos, también afectan en los dispositivos de pago electrónico, paralizando temporalmente muchas transacciones comerciales.

Previamente a estos desafíos fiscales, Apure ya registraba el segundo nivel de empleo más bajo del país, lo que se traduce en un nivel de consumo reducido. Adicionalmente, ante mayores costos administrativos, los comerciantes tienen cada vez más estímulos para trasladarse al sector informal. Algunos de estos encuentran en las ventas ambulantes, una estructura operativa con costos administrativos mínimos. De hecho, el crecimiento del sector informal se ha acelerado con la llegada de venezolanos retornados, los cuales han ingresado a este sector debido a sus bajos costos iniciales. Por ejemplo, sólo durante enero, el índice de vendedores ambulantes en el mercado municipal de San Fernando aumentó en un 50%. Este tránsito hacia el sector informal se podría traducir en menores ingresos fiscales, más empleos informales, el empeoramiento de los medios de subsistencia locales y menos protección del consumidor en los mercados no regulados. Esto podría estimular un ciclo de deterioro financiero, ante el cual, los gobiernos locales podrían responder con el incremento de las cargas impositivas y de servicios públicos, algo que a su vez, alentaría el tránsito de más negocios hacia la economía informal.

Educación

Estado Apure

El deterioro de la infraestructura educativa dificulta la reanudación de las clases presenciales



Desde el 16 de marzo de 2020, se suspendió la educación presencial en el país con el fin de mitigar la propagación de la COVID-19. Desde entonces, el sistema educativo ha recurrido a diversas iniciativas para fomentar la educación a distancia. Bofill Torres, presidente del sindicato de educadores de Apure, destacó el 23 de febrero de 2021 que, más allá de los desafíos asociados a esta modalidad y de la necesidad de que los niños retornen a las aulas, la precariedad de la infraestructura educativa y la inexistencia de condiciones mínimas de bioseguridad, dificultan la reanudación de las clases presenciales. A pesar de esto, Nicolás Maduro anunció el 28 de febrero de 2021, que las clases en todos los niveles educativos se reanudarían durante abril. Si bien, esta no es la primera vez que el mandatario anuncia el retorno a clases presenciales, aún no está claro cómo se ejecutaría dicha reanudación, ya que muchas escuelas de Apure carecen de las condiciones básicas de acueducto, saneamiento e higiene necesarias para su funcionamiento. Otras, han sido desmanteladas durante la pandemia, afrontan la falta de mantenimiento o no cuentan con el equipamiento necesario. Un factor que agudiza este escenario, es la falta de un programa de vacunación contra la COVID-19, capaz de cubrir a todos los maestros del estado.

Desde principios de 2021, la reanudación de la educación presencial ha sufrido retrasos y ha sido objeto de contradicciones al interior del gobierno nacional. El 12 de enero de 2021, durante su rendición de cuentas anual, Maduro anunció que el regreso a las

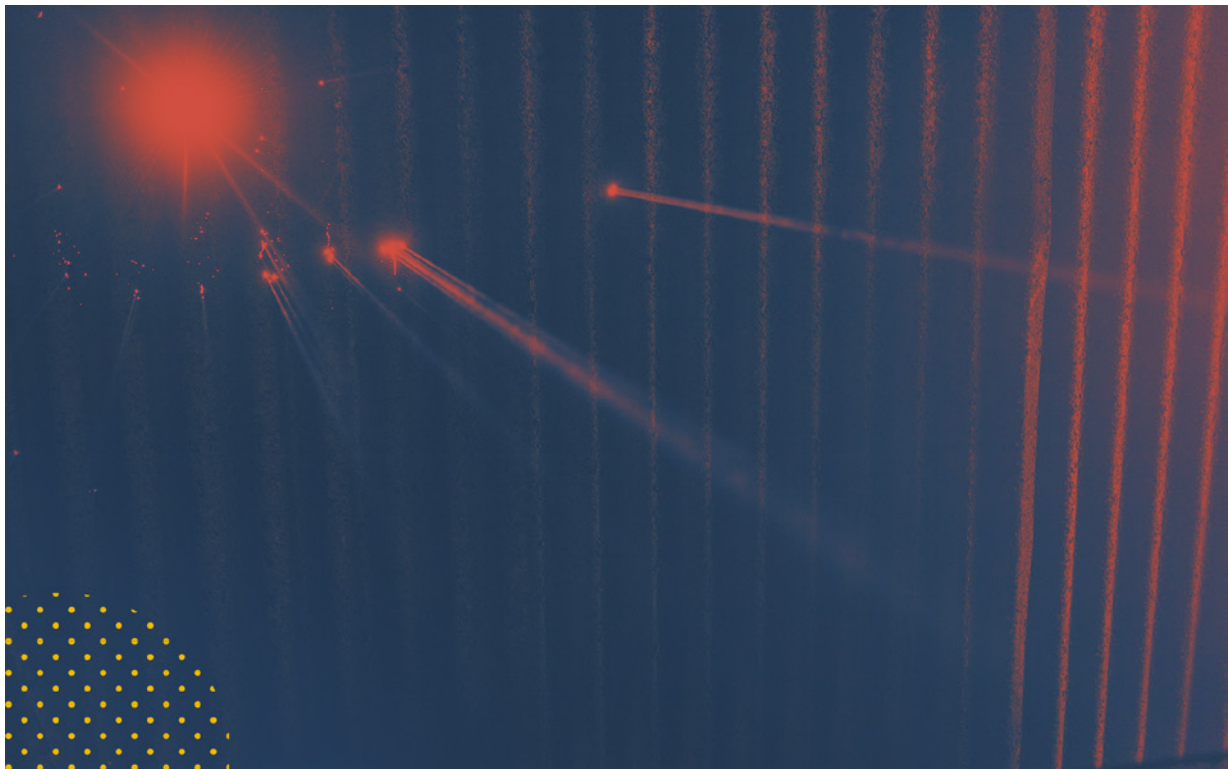
clases presenciales se realizaría en febrero, sin embargo, el 31 de enero, suspendió esta decisión debido al mal estado de las escuelas del país. El 2 de febrero, Maduro indicó que el retorno de la educación presencial dependería de la llegada de vacunas al país y del número de maestros que la recibieran. El comunicado emitido el 28 de febrero, que fue propuesto por el Ministro de Educación y presentado por Maduro, establece que la educación presencial se reiniciará en abril, y dependerá no solo de la llegada de vacunas al país, sino de la capacidad de las escuelas para cumplir con las normas básicas de higiene. Apure no ha sido incluido en la lista de estados que recibirán prioritariamente vacunas para su personal docente, algo que probablemente obedece a su situación presupuestaria, política o a su reducida capacidad institucional. Así pues, ya que el gobierno ha dejado claro que el retorno a las aulas deriva de la disponibilidad de vacunas, del mejoramiento de la infraestructura y de mejores condiciones salariales para los maestros, resulta altamente improbable que estos requisitos sean alcanzados en Apure a corto plazo.

Actualmente, en Apure, el mal estado de las escuelas resulta del bajo presupuesto destinado a mantenimiento, del incremento de la criminalidad y del uso de algunas instalaciones educativas en la atención a la pandemia. Reportes noticiosos indican que al menos seis escuelas fueron desmanteladas en el municipio de San Fernando. Delinquentes removieron parte del techo del Instituto Especial de Apure, las mesas y las sillas de los colegios Andrés Bello, Agustín Codazzi y Avelina Duarte fueron hurtadas, y las paredes de los liceos MacGregor y María Nicasia Gamarra colapsaron. Debido al mal estado de muchas viviendas de Apure, se ha incrementado la demanda de materiales para la reparación de techos. Esto ha estimulado un mercado negro de materiales, al cual probablemente fueron a parar las láminas de zinc que hacían parte del techo del Instituto Especial de Apure, así como la madera de las mesas, sillas y pupitres de las demás instituciones académicas afectadas. Y es que, frente a la escasez de gas doméstico en Apure, la madera constituye una alternativa directa para la generación de fuego, y los muebles de las escuelas vacías representan un suministro accesible. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2019-2020, 13,6% de las familias del estado residen en viviendas inadecuadas, mientras que de acuerdo a datos publicados en enero de 2021 por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), el 51,3% de los encuestados en la capital del estado, San Fernando de Apure, no había recibido gas doméstico durante tres meses o más. Por otra parte, el uso de algunas instalaciones educativas en la atención a la pandemia, es otra de las causas del mal estado que afrontan las escuelas del estado. Desde junio de 2020 y dada la cercanía de Apure a la frontera con Colombia, varias escuelas fueron acondicionadas como Puntos de Atención Social Integral – PASI y ya no funcionan para su propósito original, la educación. Algunos de estos establecimientos sufrieron daños asociados a una imprecisa planeación y a la débil implementación de los protocolos internos de aislamiento. En principio, en los PASI, que son instalaciones de acogida y aislamiento preventivo para venezolanos que retornan al país, se entregarían alimentos preparados, sin embargo, en algunos de estos puntos se entregaron alimentos crudos en su lugar. Esto llevó a que algunas personas utilizaran el mobiliario escolar para encender el fuego requerido para la cocción de sus alimentos.

Así pues, la incertidumbre que rodea a la reanudación de las clases presenciales afecta particularmente a los sectores de la población estudiantil con menos recursos económicos. Las modalidades alternativas de enseñanza, entre ellas las clases en línea, han fallado debido al bajo nivel de conectividad que existe en el estado y a sus requisitos tecnológicos. De acuerdo con la ENCOVI 2019-2020, únicamente el 4,2% de los hogares de Apure cuenta con acceso a internet, mientras que tan solo el 18,8% posee una computadora en su hogar. Dadas las limitaciones presupuestarias y la reducida disponibilidad de vacunas, resulta poco probable que el regreso a clases en Apure se produzca en el mes de abril, a pesar de lo anunciado por el gobierno en meses pasados. Estos retrasos continuarán truncando el proceso de aprendizaje de los niños y niñas del estado, así mismo, afectarán su seguridad alimentaria y sus condiciones de seguridad y bienestar. Adicionalmente, este escenario contribuirá al incremento de la deserción escolar y al involucramiento de los niños y niñas en actividades generadoras de ingresos al interior de sus hogares. Resulta incierto el modo en que estos efectos serán subsanados a largo plazo.

Seguridad Estado Apure

Medidas de seguridad inconsistentes agravan el contexto local de seguridad



Las restricciones transfronterizas derivadas de la pandemia han transformado las capacidades, dimensiones, e incluso, el accionar de los actores armados que operan en la frontera colombo-venezolana, al igual que la respuesta del gobierno venezolano. El 15 de febrero de 2021, la Oficina Nacional Antidrogas anunció la incautación de 192 kilogramos de cocaína a una estructura criminal no identificada. Esto es resultado de una acción conjunta desplegada en el municipio Muñoz, por la Dirección de Inteligencia Estratégica y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana. La operación concluyó con un saldo de dos miembros del mencionado grupo abatidos y la captura de un tercero. Aunque el gobierno lo considera un éxito, este incidente revela la complejidad del contexto de seguridad de la zona. En efecto, el narcotráfico constituye un problema enquistado en estos territorios, al igual que la explotación que ejercen los grupos armados ilegales sobre las comunidades rurales e indígenas, para beneficiarse de las rentas ilícitas. Ahora bien, la modalidad y el alcance de estas actividades criminales dependen de cuál es el grupo que opera en una zona y de su presunta relación con miembros de las fuerzas de seguridad estatales. Así pues, los efectos de estas presuntas relaciones pueden afectar las condiciones humanitarias de Apure, especialmente de las comunidades fronterizas en situación de vulnerabilidad. A pesar de la falta de información oficial precisa con respecto al incidente de seguridad registrado en febrero, fuentes secundarias han permitido elaborar un panorama más claro al respecto. Según la periodista investigativa Sebastiana Barráez, uno de los abatidos sería Arley Jesús Castro Betancourt, un comandante vinculado a las antiguas

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En consecuencia, es posible que facciones resultantes de las antiguas FARC estuvieran ejerciendo control sobre la comunidad de Elorza, capital del municipio de Rómulo Gallegos, lugar donde se estima que ocurrió el combate. Nuevamente, a pesar de la falta de información oficial precisa, este suceso podría indicar que dicha facción estaría en conflicto con los organismos gubernamentales, pero esta no sería una situación generalizada a lo largo del estado. El coordinador regional de FundaRedes, Juan García, señaló a mediados de febrero que distintos grupos armados estarían ejerciendo el control de las rentas ilícitas en al menos 10 poblaciones rurales de los municipios de Achaguas, Pedro Camejo y San Fernando. La disputa que mantienen estos grupos entre sí, y contra el gobierno, es cada vez más intensa y ha provocado el desplazamiento de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, incluyendo miembros de los pueblos indígenas Jivi y Makaguan. De acuerdo a reportes noticiosos, algunas familias indígenas se han visto forzadas a desplazarse en numerosas ocasiones al quedar atrapadas en los enfrentamientos armados. Según el gobierno colombiano, los incidentes de finales de marzo llevaron a más de 3.000 a desplazarse desde Apure al departamento de Arauca, muchas de las cuales se encuentran en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.

Esta tendencia es agravada por la falta de control de las autoridades locales, sobre diversas actividades ilícitas que se vienen desarrollando en el estado. El 2 de marzo, por ejemplo, FundaRedes afirmó que grupos armados ilegales presentes en los municipios de Achaguas, Rómulo Gallegos y Pedro Camejo, estarían talando indiscriminadamente árboles y comerciando con estas maderas, a fin de incrementar sus rentas. Actualmente, esta actividad es altamente lucrativa dada la escasez de gas doméstico y la necesidad de carburantes para cocinar. A ello se suma que la tala de árboles para construir pistas de aterrizaje clandestinas ya venía desplazando a las familias locales. Más allá de algunas reacciones aisladas de las fuerzas policiales y militares en contra de estas actividades, es notoria su ausencia en estas zonas. Aunque resulta difícil establecer las razones de dicha ausencia, Transparencia Venezuela afirma que presuntamente existirían indicios que vincularían a miembros de alcaldías, gobernaciones, fuerzas policiales y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del estado de Apure, con las actividades ilícitas de algunos grupos delincuenciales. Estos presuntos vínculos afectarían a cada comunidad de manera distinta, según el territorio y el grupo que estaría ejerciendo dicho control social. Dentro de los posibles afectaciones sobresalen el deterioro de las economías locales, la explotación laboral, el sometiendo de las mujeres y las niñas a diversos tipos de explotación, e incluso, la prohibición de las actividades tradicionales de sustento. El gobierno nacional ha negado reiteradamente estas acusaciones. Por ejemplo, el 17 de febrero de 2021, Nicolás Maduro rechazó las acusaciones del gobierno colombiano relativas a los presuntos vínculos que existirían entre el gobierno venezolano y grupos insurgentes colombianos. El mandatario resaltó que, durante diciembre de 2020, él ya había declarado que se capturaría y procesaría según la ley, a cualquier miembro de grupos armados colombianos que entrara en Venezuela.

El control ejercido por diversos grupos armados sobre las comunidades rurales del estado de Apure es intenso, y, a menudo deriva en enfrentamientos armados con los organismos de seguridad del Estado, así como en el desplazamiento de los habitantes de las zonas afectadas. Ahora bien, este control también podría adoptar la forma de un sistema de vigilancia relativamente no violento, dentro del cual se perpetraría un nivel de reclutamiento y explotación forzada, suficiente para mantener y expandir dichas empresas criminales. Cuál de estos resultados se produzca, dependerá del grupo armado presente en estos territorios. Ahora bien, es probable que estas empresas criminales no resulten investigadas ni judicializadas, lo que aumentará la sensación de impunidad, así como el temor y la desesperanza entre las comunidades del estado. Si bien, estas tendencias no son nuevas, según los últimos incidentes, podrían estarse consolidando y expandiendo en Apure. Esto podría empeorar los indicadores humanitarios de estos territorios e incrementar los desafíos que enfrentan las agencias de respuesta humanitaria en el estado. A pesar de que el gobierno ha resaltado sus logros operativos en contra estos grupos, resulta poco probable que exista una capacidad operativa o técnica suficiente para mitigar los efectos de estas dinámicas de seguridad en el futuro cercano, incluso ante la existencia de una voluntad política genuina.



vzat

Esta información y análisis son proporcionados únicamente para el uso interno de los usuarios y tiene como objetivo contribuir a la elaboración de políticas de asistencia humanitaria en Venezuela.

No se permite su citación en ningún escenario, ni su copia o distribución, total o parcial, sin la aprobación previa del VZAT.